



Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinte (2020)

REFERENCIA

EXPEDIENTE: 11001 33 35 010 2020 00245 00
CONVOCANTE: VÍCTOR JOEL BELTRÁN LEÓN
CONVOCADO: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, CASUR
CLASE: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

Procede el Despacho a pronunciarse sobre la diligencia de Conciliación Prejudicial referenciada, remitida por la Procuraduría 134 Judicial II para Asuntos Administrativos, contenida en el **Acta de Conciliación Prejudicial de fecha 14 de septiembre de 2020**, llevada a cabo entre el apoderado del señor Agente (r) **VÍCTOR JOEL BELTRÁN LEÓN** en calidad de convocante, y la Doctora **AYDA NITH GARCÍA SÁNCHEZ** en calidad de apoderada de la **CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL**.

Fundamentos de Hecho:

Se tienen como fundamentos fácticos los siguientes:

1. Señala el apoderado del convocante que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional- CASUR, le reconoció la asignación de retiro al señor Agente (r) Víctor Joel Beltrán León a través de la Resolución No. 000290 del 10 de febrero de 1994.
2. Indica que, durante la vigencia correspondiente a los años 1997, 1999 y 2002, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional- CASUR, le reajustó la asignación de retiro en un porcentaje inferior a la variación de IPC del año inmediatamente anterior.
3. Agrega que, en el año 2006, el convocante presentó medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, para el reajuste y pago del IPC, a partir del año 1999 hasta el año 2004; del cual conoció el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá dentro del proceso No. 2006-00131, quien a través de sentencia de fecha 15 de agosto de 2012 resolvió conceder las pretensiones a Víctor Beltrán para los años 1999, 2002 y 2004.
4. Alude que en su momento no se solicitó lo concerniente al IPC de 1997, incremento al cual considera también tiene derecho el convocante.
5. Mediante petición radicada con el Id 540418 del 14 de febrero de 2020, el convocante solicitó la reliquidación, reajuste, reconocimiento y pago indexado de su asignación, con fundamento en el aumento decretado por el Gobierno Nacional para el año 1997; petición que a través de Oficio No. 202012000088621 Id: 556636 del 03 de abril de 2020, fue resuelta desfavorablemente por parte de la Entidad.

La solicitud de conciliación:



El señor Agente (r) Víctor Joel Beltrán León a través de apoderado presentó ante la Procuraduría Judicial Administrativa –Reparto-, solicitud de conciliación prejudicial, en la que señala como pretensiones las que a continuación se detallan:

“PRIMERO: Que se declare LA NULIDAD del Acto Administrativo constituido por el oficio No. 202012000088621 Id: 556636 de fecha 03 de abril de 2020, firmado por la señora Jefe Oficina Jurídica de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, a través del cual negó el reajuste de la mesada pensional, de acuerdo con el Índice de Precios del Consumidor (IPC).

SEGUNDO: Que, como consecuencia de la anterior declaración a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se ordene reliquidar, reajustar y pagar la asignación de retiro del convocante, adicionando el porcentaje correspondiente al desfase entre el aumento efectuado por el Gobierno Nacional y la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, para el año que se relaciona a continuación: Año 1997 – Porcentaje 2.76%.

TERCERO: Que el reajuste de la asignación de retiro se reliquide y refleje año por año, desde 1997 con los nuevos valores tomándose como referencia la diferencia indicada en el numeral anterior. Teniendo en cuenta el término de prescripción cuatrienal, de acuerdo con el decreto 1213 de 1990, reconocimiento que sería a partir del 14 de febrero del 2016.”.

El Comité de Conciliación de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

El Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, para analizar la viabilidad de conciliar con el convocante el reajuste de la asignación de retiro con base en el IPC de 1997, llevó a cabo sesión el día 03 de agosto de 2020, en la cual autorizó conciliar lo referido. La decisión del Comité en la mencionada sesión se concretó así:

“El caso analizado, del AG (r) VÍCTOR JOEL BELTRÁN LEÓN, identificado con la cédula de ciudadanía 290.904 Fecha de retiro 20 de abril de 1994 con un 85% de su asignación básica. Se advierte que el demandante en pretérita oportunidad, mediante acción de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó a Casur y en sentencia del 15 de agosto de 2012 ordenada por el Juzgado 7 Administrativo del Circuito de Bogotá le fueron reconocidos los años 1999, 2002 y 2004, quedando pendiente el año 1997.

Ahora, nuevamente el titular, pretende el reajuste de su asignación de retiro con base en el índice de precios al consumidor, pero exclusivamente por el año 1997 estimando que era favorable conforme al grado.

Al verificar el expediente administrativo del actor, se evidencia que al convocante no se le reconoció el año 1997 ya que no se agotó vía gubernativa por el mismo, entonces, atendiendo la nueva política del Comité Judicial de la Entidad, en el siguiente sentido:

“...Teniendo en cuenta lo anterior se ha evidenciado que en muchos de los casos los usuarios no reclaman la totalidad de los años favorables, y se ven en la necesidad de imponer nuevamente solicitud de conciliación o proceso de nulidad y restablecimiento de derecho para el reconocimiento de los años que no se han reconocido. Ante esta situación el comité de conciliación aprueba las conciliaciones de los casos en los cuales no se ha decidido de fondo mediante Proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por la totalidad de los años que sean favorables dependiendo el grado, igualmente, que los años faltantes por reclamación, no se hubiesen solicitado cuando en el primer caso agotó la vía gubernativa para reclamar el derecho”.

Resulta procedente reajustar la prestación del convocante, a partir del 01 de enero de 1997, en los años que estuvieron por debajo del IPC, para el grado de Agente, es decir 1997 como quiera que el año 1999 y 2002 ya fueron cancelados con anterioridad. Teniendo en cuenta la prescripción cuatrienal del Decreto 1213 de 1990 se le pagará a partir del 14 de febrero de 2016 en razón a la solicitud de reajuste del IPC radicada el 14 de febrero de 2020.



Se reconoce la totalidad del capital como derecho esencial, se concilia el 75% de indexación y se pagará dentro de los 6 meses siguientes, tiempo en el cual no habrá lugar al pago de intereses, este plazo empezará a contar una vez el interesado presente solicitud de pago ante la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, acompañada de los documentos legales y pertinentes, incluido el auto de aprobación del presente acuerdo emitido por el Juzgado respectivo.

Igualmente, se reajustará la prestación en la respectiva nómina a partir del día siguiente de la fecha de la celebración de la audiencia de conciliación a la que se anexará la propuesta de liquidación.

En los anteriores términos el comité de conciliación y defensa jurídica de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, determina que para el presente asunto le asiste ánimo conciliatorio”.

Conciliación ante la Procuraduría 134 Judicial II para Asuntos Administrativos:

La Procuraduría 134 Judicial II Para Asuntos Administrativos reunió al convocante Víctor Joel Beltrán León, y a la convocada Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, en audiencia de conciliación celebrada el 1º de septiembre de 2020 dentro del proceso de radicado No. E-2020-292033 del 11 de junio del año en curso, la cual fue suspendida por mutuo acuerdo entre las dos partes por encontrarse algunas inconsistencias; y retomada el 14 de septiembre del mismo año, donde se dio continuidad a la misma. Se registró que la convocada aceptó conciliar el 100% del capital de la reliquidación y el 75% de la indexación, con base en la prescripción cuatrienal prevista en el Decreto 1213 de 1990.

Expresamente se señala por la parte convocante *“Acepto en su totalidad dicha propuesta y a su vez quiero agradecerle su colaboración en haber revisado y corregido la anterior propuesta”.*

Finalmente, el acuerdo de las partes fue avalado por la Procuradora 134 Judicial II para Asuntos Administrativos, según consta en el acta suscrita de la audiencia de conciliación celebrada el 14 de septiembre de 2020.

CONSIDERACIONES

El Decreto 1069 de 2015¹ compiló las normas que regulaban la conciliación en los asuntos de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa que contenía, principalmente, la Ley 640 de 2001² y el Decreto 1716 de 2009³, aunque posteriormente lo modificó el Decreto 1167 de 2015⁴. El artículo 2.2.4.3.1.1.2. del Decreto 1069 de 2015 reúne los presupuestos procesales de la conciliación extrajudicial administrativa. Para los asuntos susceptibles del medio de control de nulidad y restablecimiento los requisitos de procedibilidad se contraen a los siguientes: (i) que el asunto sea de carácter particular y contenido económico; (ii) el agotamiento de la actuación administrativa; (iii) que no hubiese caducado la respectiva acción; y (iv) que se realice con facultades para ello y a través de abogado⁵. En los párrafos subsiguientes se desglosarán estos requisitos.

¹ Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.

² “Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones”

³ Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001.

⁴ Por el cual se modifican y se suprimen algunas disposiciones del Decreto número 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.

⁵ ARTÍCULO 2.2.4.3.1.1.5. DERECHO DE POSTULACIÓN. Los interesados, trátense de personas de derecho público, de particulares o de personas jurídicas de derecho privado, actuarán en la conciliación extrajudicial por medio de apoderado, quien deberá ser abogado inscrito y tener facultad expresa para conciliar. (Decreto 1069 de 2015).



Clase de Asunto.

El asunto cumple con la condición de ser de carácter particular porque se trata del derecho pensional del convocante, Víctor Joel Beltrán León. Si bien, la pensión es un derecho cierto e indiscutible, no se concilia los requisitos para el reconocimiento sino el reajuste anual de la prestación, aunque se plantee como una reliquidación. El reajuste constituye un aspecto accidental de la pensión que por su contenido económico lo hace susceptible de conciliarse.

Agotamiento de la Actuación Administrativa.

El señor Víctor Joel Beltrán León solicitó la reliquidación de la asignación de retiro mediante radicado 20201200-010076892 Id: 540418 del 14 de febrero de 2020. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional respondió la petición a través del Oficio No. 202012000088621 Id: 556636 del 03 de abril de 2020. La convocada señaló, entre otros asuntos, que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional no accede de manera favorable en sede administrativa al reajuste de la sustitución de asignación de retiro con base en el Índice de Precios al Consumidor – IPC; que conforme a los recientes pronunciamientos del Consejo de Estado, decidió tomar la línea de acción consistente en conciliar los reajustes dentro de los procesos judiciales y extrajudiciales ante la Procuraduría General de la Nación, para que luego surta el control de legalidad. De esta forma, se entienden agotados los recursos dentro del procedimiento administrativo.

Caducidad de la Acción.

Para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral existe un término perentorio de cuatro (4) meses dispuesto por la ley 1437 de 2011 artículo 164⁶, para contar la caducidad de la acción, el cual empieza a contarse a partir del día siguiente de la notificación, publicación o ejecutoria del acto administrativo demandado. Sin embargo es de recordar que el mismo artículo, establece una excepción para la aplicación de la caducidad alegada, esto es, cuando las pretensiones versen sobre prestaciones de tipo periódico, tal y como acontece en el presente caso, ya que se solicita la reliquidación de la asignación de retiro con base en el IPC, la cual es pagadera mes a mes, siendo inaplicable la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Derecho de Postulación.

El convocante, Víctor Joel Beltrán León confirió poder al abogado Ricardo Prieto Torres, a quien le fue reconocida personería a través de Auto No. 184-2020 del 17 de julio de 2020 proferido por la Procuraduría 134 Judicial II para Asuntos Administrativos. La convocada, Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional confirió poder a través de la representante judicial y extrajudicial.

Marco Jurídico del reajuste de las asignaciones de retiro con base en el IPC:

⁶ **ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA.** La demanda deberá ser presentada: (...)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: (...)

d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales;"



En vigencia de la Constitución de 1886 la autoridad competente para expedir el régimen prestacional de los miembros de las Fuerzas Armadas era el Congreso de la República⁷, disposición constitucional que tuvo desarrollo legal con la expedición de la Ley 66 de 1989, por medio de la cual la corporación Legislativa: *“(...) reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias pro t  mpore para reformar los estatutos y r  gimen prestacional del personal de Oficiales, Suboficiales, Agentes y Civiles del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y de Polic  a Nacional y Establece el R  gimen de Vigilancia Privada”*.

Con fundamento en dicha ley el Gobierno Nacional procedi   a expedir los siguientes Decretos:

1. Decreto 1211 de 1990, “Por el cual se reforma el estatuto del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares”
2. Decreto 1212 de 1990, “Por el cual se reforma el estatuto del personal y Suboficiales de la Polic  a Nacional”
3. Decreto 1213 de 1990, “Por el cual se reforma el estatuto de personal de Agentes de la Polic  a Nacional”

En el primer Decreto se consagra en el art  culo 169, en el segundo en el art  culo 151 y en el tercero en el art  culo 110, el principio de oscilaci  n referido a que las asignaciones de retiro y las pensiones de que tratan dichos decretos se liquidar  n *“tomando en cuenta las variaciones que en todo tiempo introduzcan en las asignaciones de actividad para cada grado y de conformidad con lo dispuesto en el art  culo (...) de este Decreto. En ning  n caso aquellas ser  n inferiores al salario m  nimo legal”*.

As   las cosas, es claro que en vigencia de los mencionados decretos los aumentos anuales a las asignaciones de retiro del personal de la fuerza p  blica se hac  an teniendo en cuenta las variaciones (aumentos) que en todo tiempo se introdujeran a las asignaciones de actividad para cada grado.

A la luz de la Constituci  n Pol  tica de 1991, el precepto constitucional precedentemente se  alado se mantuvo, toda vez que el legislador radic   igualmente tal facultad en cabeza del Congreso de la Rep  blica⁸, al establecer que es el legislativo quien debe determinar los criterios y objetivos generales a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional al ejercer las facultades otorgadas a   ste en materia Salarial y Prestacional de los servidores p  blicos, e igualmente respecto de la fijaci  n del r  gimen prestacional de las fuerzas armadas, es decir, el congreso establece el marco legal al que debe sujetarse el Gobierno Nacional.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Constituyente de 1991, se expidi   por el Congreso la Ley 4   del 18 de mayo de 1992, y en ella se  al   las normas, objetivos y criterios que debe observar el gobierno nacional para la fijaci  n del r  gimen salarial **y prestacional** de los miembros de la fuerza p  blica, y para mayor claridad se dijo

⁷ Constituci  n Pol  tica 1886 “Art. 76 Corresponde al Congreso hacer las Leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes atribuciones: (...) 9) Determinar la estructura de la Administraci  n Nacional mediante la creaci  n de Ministerios (...) y fijar las escalas de remuneraci  n correspondiente a las distintas categor  as de empleos, as   como el r  gimen de prestaciones sociales”.

⁸ Constituci  n Pol  tica 1991. Art. 150 Corresponde al congreso hacer las leyes. Por medio de ella ejerce las siguientes funciones: (...) 19. Dictar las normas generales, y se  alar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para los siguientes efectos: e) Fijar el r  gimen salarial y prestacional de los empleados p  blicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza P  blica. f) Regular el r  gimen de prestaciones sociales m  nimas de los trabajadores.



por el legislador que el competente para fijarlo era el Gobierno Nacional⁹ e igualmente estableció una escala gradual porcentual con el fin de nivelar la remuneración tanto del personal activo como retirado de la fuerza pública la cual se cumplió efectivamente entre los años 1992 y 1996.

No obstante lo anterior, es el mismo legislador quien con fundamento en la atribución constitucional precedentemente mencionada expide, con posterioridad a la expedición de la Ley 4 de 1992, dos leyes, de gran trascendencia para el caso que nos ocupa, estas son:

Ley 100 de 1993, que consagra en el artículo 14 que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución de sobrevivientes, en cualquiera de los regímenes del sistema general de pensiones deben ser reajustadas anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del índice de precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior.

La misma ley en su artículo 279 excluyó del Sistema Integral de Seguridad Social, entre otros al personal de la Fuerza Pública, y al excluirlo de dicho sistema se evidenciaba entonces, que el artículo 14 tampoco le era aplicable a los miembros de la fuerza pública.

Sin embargo, con posterioridad se expide la Ley 238 de 1995 mediante la cual adiciona el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, para precisar que si bien existe un grupo de funcionarios que no se encuentran sometidos al régimen o sistema Integral de Seguridad Social consagrado en la Ley 100, y por lo tanto se encuentran excepcionados, dichas excepciones no implican negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de la Ley 100 de 1993, esto es, que beneficios como el que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución de sobrevivientes, sean reajustadas anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del índice de precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior.

Proferida la Ley 238 de 1995 que extiende el beneficio del reajuste de las pensiones con fundamento en las variaciones en el Índice de Precios al consumidor, aun a quienes se encuentran excepcionados de la aplicación de la Ley 100 de 1993, entre ellos a los miembros de la fuerza pública, se inicia por parte de quienes se encuentran en situación de retiro el agotamiento de la vía gubernativa a fin de obtener el reajuste anual de sus asignaciones con fundamento en las variaciones al IPC cuando este es superior a las variaciones obtenidas con fundamento en el principio de oscilación, para posteriormente acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa en acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Es así como la máxima autoridad de la jurisdicción contenciosa administrativa, Sección Segunda en pleno, profiere la sentencia del 17 de mayo de 2007, Rad. 8464 de 2005 accediendo a las pretensiones de la demanda, al estimar que la Ley 238 de 1995, no podía ser inaplicada, aun cuando la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los miembros de la fuerza pública estaba radicada en el Presidente de la República y con la claridad suficiente que la asignación de retiro se asimila a la pensión de jubilación, sentencia que se constituyó en la fundadora de línea.

⁹ Ley 4 de 1992. "ARTICULO 1º. El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de: (...) d) Los miembros de la Fuerza Pública"



A partir de la mencionada sentencia se dio un amplio desarrollo jurisprudencial sobre el tema, y se determinó que a partir de la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004 el reajuste ya no procedería aplicando la variación del índice de precios al consumidor, IPC, sino con aplicación del principio de oscilación, previsto el artículo 42 del citado Decreto, no obstante ello, la base de la asignación de retiro a 31 de diciembre de 2004 debía incluir reajuste al que se hubiera tenido derecho con fundamento la variación porcentual del índice de precios al consumidor, IPC, respecto de los años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, precedente de la corte de cierre de la jurisdicción, entre el que cabe mencionar la sentencia del Consejo de Estado, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION SEGUNDA, SUBSECCION B, Consejero Ponente: Dr. GERARDO ARENAS MONSALVE. Bogotá, D.C., quince (15) de noviembre de dos mil doce 2012. Radicación número: 25000-23-25-000-2010-00511-01(0907-11). Actor: CAMPO ELIAS AHUMADA CONTRERAS. Demandado: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, la cual constituye sin lugar a duda una sentencia consolidadora de línea, de allí la importancia para que se proceda a su cita por parte de este despacho judicial, así:

“Recapitulando lo antes expuesto, estima la Sala que como se ha venido sosteniendo de tiempo atrás el correcto entendimiento del problema jurídico que se suscita en torno al reajuste de las asignaciones de retiro del personal de la Fuerza Pública, con fundamento en la variación porcentual del índice de precios al consumidor, IPC, y la solución que ha planteado la Sala de manera consistente y uniforme, a partir de la sentencia de 17 de mayo de 2007, consiste en precisar, que los miembros de la Fuerza Pública tienen derecho al reajuste de su asignación de retiro, anualmente, y que en virtud de lo dispuesto en la Ley 238 de 2005 ese reajuste para los años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 tuvo lugar de conformidad con el índice de precios al consumidor, IPC, en tanto resultaba más favorable que el establecido por el gobierno nacional, en aplicación del principio de oscilación, que como resulta lógico, dicho incremento incidió positivamente en la base de la referida prestación, esto es incrementándola.

*Que a partir de la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 31 de diciembre de 2004, el reajuste ya no se haría más de conformidad con el índice de precios al consumidor, IPC, sino con aplicación del principio de oscilación, previsto en el artículo 42 del citado Decreto, **pero que en todo caso**, la base de la asignación de retiro a 31 de diciembre de 2004 debe contemplar el reajuste que en el pasado se ordenó con fundamento en fundamento la variación porcentual del índice de precios al consumidor, IPC, respecto de los años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004*

En otras palabras, los incrementos que se efectúen sobre la asignación de retiro de un oficial o suboficial de la Fuerza Pública en retiro a partir de la entrar en vigencia el Decreto 4433 de 2004, esto es el 31 de diciembre de 2004, no pueden desconocer que dicha asignación de retiro, en su base, experimentó un incremento en virtud del reajuste que en sede judicial se ordenó, con fundamento en la variación porcentual del índice de precios al consumidor, IPC, sobre el cual en todo caso deberá incrementarse a futuro, en virtud del principio de oscilación. Una interpretación en contrario desconocería el derecho constitucional de los pensionados a mantener el poder adquisitivo de su mesada, consagrado en dos enunciados normativos distintos de la Constitución Política, esto es, en el inciso sexto del artículo 48¹⁰ y en el inciso tercero del artículo 53, derecho que a juicio de la Sala constituye una expresión del principio de Estado Social de Derecho, de la protección especial que establece la carta Política a las personas de la tercera edad y de los derechos a la igualdad y al mínimo vital y móvil.

En este punto, la Sala reitera que no hay duda de la especial importancia de que goza una prestación pensional, entendida como el medio que permite amparar a un trabajador las contingencias a las que se puede enfrentar en desarrollo de su actividad laboral, esto es, vejez, invalidez o muerte, por lo que negar el derecho a su reajuste afectaría gravemente su capacidad de subsistencia y la de su entorno familiar. Así las cosas, no hay razón jurídica que impida en el caso de las asignaciones de retiro su

¹⁰ “La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante.”.



incremento o reajuste anual con el fin de garantizar el mantenimiento de su poder adquisitivo de sus mesadas, tal como sucede con una prestación pensional. (...)

Teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden, concluye la Sala que el reajuste efectuado sobre las asignaciones de retiro de los oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública obedece a uno sólo, el cual se ha efectuado en el tiempo con fundamento en dos criterios distintos, a saber, el primero con observancia del índice de precios al consumidor, IPC, esto, hasta el 31 de diciembre de 2004, fecha en la que se retoma el principio de oscilación el cual, en todo caso, incrementará anualmente y a futuro las mesadas de las asignaciones de retiro del personal en retiro, partiendo siempre de la última mesada pensional del año 2004, la cual como resulta obvio había sido ajustada en su base conforme al índice de precios al consumidor, IPC.

Lo anterior, no supone en ningún caso un doble reajuste sino como quedó visto el ejercicio del derecho constitucional de que gozan los miembros en retiro de la Fuerza Pública a que a mantener el poder adquisitivo de su mesada pensional”.

Conforme a la normatividad analizada y al precedente del Honorable Consejo de Estado, es evidente que los miembros de la fuerza pública que perciben asignación de retiro, tienen derecho a que esta sea reajustada anualmente con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 en virtud de lo dispuesto en la Ley 238 de 1995, para los años 1997 a 2004, siempre y cuando se les haya reconocido dicha asignación y tengan la condición de retirados en los años mencionados.

Caso Concreto:

Dentro del trámite de las diligencias, se tiene probado que (i) mediante Resolución No. 290 del 10 de febrero de 1994, la entidad accionada reconoció asignación del retiro al convocante, determinando su efectividad a partir del 20 de abril de 1994 (Fls. 13-14); (ii) a través de sentencia con fecha del 15 de agosto de 2012 proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, se decidió, entre otros asuntos, declarar la nulidad parcial del Oficio OJURI 03601 del 16 de noviembre de 2005 y, como consecuencia de ello, a título de restablecimiento de derecho, condenar a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional a reajustar la asignación de retiro del señor Agente (r) Víctor Joel Beltrán León, identificado con C.C. No. 290.904 de Junín Cundinamarca, teniendo en cuenta para tal efecto las variaciones del Índice de Precios al Consumidor del año inmediatamente anterior que certifique el DANE, para los años 1999, 2002 y 2004 (Fls. 16-37); (iii) posteriormente, a través de Resolución No. 17142 del 23 de octubre de 2012, la entidad convocada dio cumplimiento a la sentencia señalada en el punto anterior (Fls. 38-40); (iv) acto seguido, el convocante solicitó a la misma entidad el reajuste de la asignación de retiro de conformidad con el IPC del año 1997 (Fls. 6-7), petición que fue resuelta negativamente mediante Oficio No. 202012000088621 Id: 556636 del 03 de abril de 2020 (Fls. 8-11); (v) de conformidad con la preliquidación aportada por CASUR al expediente (Fls. 86-98) y de la cual estuvo de acuerdo, tanto la parte convocante, como la Procuradora 134 Judicial II para Asuntos Administrativos en audiencia de conciliación celebrada el 14 de septiembre de 2020 (Fls. 101-104), se verifican los incrementos porcentuales realizados a la asignación de retiro del convocante como Agente de la Policía Nacional según el principio de oscilación, valores que se cotejan frente a los porcentajes correspondientes al índice de precios al consumidor para cada año solicitado, según datos tomados tanto de la liquidación que efectuó directamente CASUR, como de la página WEB del DANE:



POLICÍA NACIONAL: Agente

AÑO	OCSIL	IPC
1997	18,8689	21,63 (96)
1998	17,9646	17,68 (97)

Con fundamento en lo anterior, y especialmente en el principio de favorabilidad contenido en el artículo 53 Constitucional, se tiene que al convocante le asiste el derecho a que en los eventos en que el índice de precios al consumidor sea mayor que el porcentaje consagrado para dar aplicación al principio de oscilación, por favorabilidad debe ser aplicado el índice de precios al consumidor para que la asignación de retiro que viene percibiendo sea reajustada anualmente.

Así las cosas, se tiene que en el presente caso le asiste el derecho al convocante, por cuanto está legitimado para reclamar la reliquidación de su asignación de retiro con base en el IPC para el año 1997, petición a la que accedió el ente convocado en la audiencia de conciliación celebrada el 14 de septiembre de 2020 ante la Procuraduría 134 Judicial II para Asuntos Administrativos (fl. 101-104).

Así las cosas, se colige que la decisión adoptada por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se ajusta a derecho y a las decisiones adoptadas por el Consejo de Estado en temas idénticos relacionados con la reliquidación de la asignación de retiro con base en el IPC.

El pago se realizará con fundamento en los parámetros presentados en la preliquidación, efectuada por la entidad accionada obrante a folio 98 del expediente así:

<i>“Valor de capital indexado</i>	<i>3.189.277</i>
<i>Valor capital 100%</i>	<i>3.003.965</i>
<i>Valor indexación</i>	<i>185.312</i>
<i>Valor indexación por el (75%)</i>	<i>138.984</i>
<i>Valor capital más (75%) de la indexación</i>	<i>3.142.949</i>
<i>Menos descuentos CASUR</i>	<i>-94.625</i>
<i>Menos descuentos de Sanidad</i>	<i>-109.745</i>
<i>TOTAL VALOR A PAGAR</i>	<i>2.938.579”</i>

En este orden de ideas, es claro que en el presente caso se cumple con los presupuestos exigidos para aprobar la conciliación prejudicial, realizada entre el señor Agente (r) de la Policía Nacional **VÍCTOR JOEL BELTRÁN LEÓN** en calidad de Convocante y la **CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL**.

De lo expuesto en precedencia éste Despacho Judicial, advierte que la conciliación prejudicial, realizada entre el apoderado del señor Agente (r) de la Policía Nacional **VÍCTOR JOEL BELTRÁN LEÓN** en calidad de Convocante y la **CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL**, por valor de **\$2.938.579** reúne los requisitos para ser aprobada, toda vez que el convocante agotó debidamente los recursos dentro del procedimiento administrativo, la acción no se encuentra caducada y no se causa detrimento al erario público, pues los valores reconocidos, corresponden a sumas que deben ser canceladas por ley al actor, razón por la cual



será aprobado el acuerdo celebrado ante la Procuraduría 134 Judicial II para Asuntos Administrativos.

Por tanto el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: APROBAR el Acta de Conciliación de fecha 14 de septiembre de 2020, celebrada ante la Procuraduría 134 Judicial II para Asuntos Administrativos, entre el señor Agente (r) de la Policía Nacional **VÍCTOR JOEL BELTRÁN LEÓN** identificado con cédula de ciudadanía No.290.904, en calidad de Convocante y la **CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL**, por valor de **\$2.938.579**, por los motivos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: El acta de acuerdo conciliatorio y el auto aprobatorio debidamente ejecutoriado prestarán mérito ejecutivo y tendrán efectos de cosa juzgada de conformidad con el artículo 72 de la ley 446 de 1998.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, previas las anotaciones y constancias del caso, expídanse copias a las partes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 114 del Código General del Proceso y archívese el expediente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUZ ADRIANA MÉNDEZ MARTÍNEZ
JUEZ

JUZGADO 10 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SECCIÓN SEGUNDA			
Por anotación en	ESTADO No.	notifico a las	
partes	la	providencia	anterior hoy
		a las 08:00 A.M.	
LUIS ALEJANDRO GUEVARA BARRERA Secretario			

JGR